

Santiago, veintidós de junio de dos mil veintitrés.

**Vistos:**

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de sus fundamentos octavo al decimosexto, que se eliminan. También se suprimen sus considerandos décimo noveno al vigésimo segundo; y vigésimo cuarto a vigésimo sexto.

En el razonamiento vigésimo tercero, se prescinde de su frase final que inicia con “por lo que resulta a juicio de esta sentenciadora...” hasta su término.

**Y se tiene en su lugar y, además, presente:**

1° Que en relación al extremo correspondiente a la excepción de prescripción, el fallo en alzada estimó su procedencia sobre la base de que no existe regla que excluya tal modo de extinguir las acciones y obligaciones en el presente caso, señalando que las disposiciones relativas a la imprescriptibilidad a que se refieren los tratados internacionales que menciona, alcanza solamente la acción penal de crímenes de lesa humanidad, pero no aquellas de naturaleza patrimonial.

2° Que, como ya ha sido resuelto por este tribunal, en la especie, se demanda la indemnización de perjuicios, consecuente a la comisión de un ilícito calificado como de lesa humanidad, por lo que se trata de la reparación íntegra de perjuicios ocasionados por el actuar de agentes públicos, lo que implica, que atendido el deber inexcusable del Estado de tutelar de modo efectivo los derechos de las personas y acorde con la definición republicana que inspira nuestro ordenamiento jurídico-institucional que define que es dicha entidad la que debe estar al servicio de la persona, y no al revés, fluye con nitidez el derecho de las víctimas de recibir compensación justa y adecuada, de acuerdo además con los principios generales del derecho internacional de los derechos humanos y la normativa de los tratados de esa naturaleza ratificados por nuestro país, que obligan al Estado de Chile a reconocer y proteger el derecho a la reparación íntegra, en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 5° y en el artículo 6° de la Carta fundamental.

3° Que en este escenario y ponderado el mérito de la prueba rendida, en especial documental que da cuenta de la calidad de víctimas de detención ilegal y



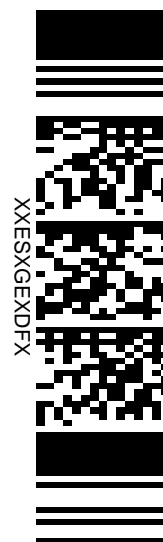
torturas de los demandantes, reconocida en múltiples antecedentes y que sirvieron también de base a los diferentes pagos y beneficios que el mismo Estado les ha otorgado, además de lo referido por los testigos e informes psicológicos, se debe tener por probados los hechos que han servido de fundamento a la demanda y que consistieron en privaciones de libertad y vejámenes de diverso índole, repetidos en muchos de los casos, lo que constituye hechos ilícitos que deben ser calificados como delitos de lesa humanidad y que, en consecuencia, han producido los perjuicios que relatan y alegan los actores.

Al respecto, se hace necesario también tener en consideración, que la defensa fiscal no controvertió los hechos, sino que opuso excepciones para eximirse del pago que ahora se pretende.

Asimismo, las circunstancias y naturaleza de los hechos cometidos, así como el contexto político en el cual se verificaron, corresponden a injustos de tal entidad, a la luz del derecho internacional, que debe ser sancionado por merecer reprobación universal, en cuanto afecta la dignidad humana violando de manera grave los derechos y libertades proclamadas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

En tal sentido, la Corte Suprema ha señalado que la prohibición internacional a que se sujetan las actuaciones y situaciones como las de autos, se encuentran sancionadas en nuestro país por una serie de instrumentos internacionales, debidamente incorporados a nuestro ordenamiento jurídico, por lo menos desde los Convenios de Ginebra, ratificados por nuestro país en el año 1951 (como se expresa en la sentencia dictada en autos Rol N° 559-14 de dicho tribunal superior), sosteniéndose ya, de manera pacífica, que en estos casos es impropio alegar la prescripción de la acción penal, pues conforme lo expuesto, se concluye la imposibilidad de aplicar dichos institutos en procesos que inciden en situaciones y contingencias como las de la especie.

4° Que, en razón de lo analizado, ocurre que la procedencia de la excepción de prescripción de la acción civil, radica en dilucidar si el estatuto de imprescriptibilidad ya referido, se extiende o no al ámbito de la responsabilidad civil.



En tal entendido, debe tenerse en consideración, que si bien la pretensión es de naturaleza pecuniaria, en estricto rigor, la presente acción no responde a una de perfil meramente patrimonial, pues se trata de una de naturaleza reparatoria a propósito de la violación de derechos humanos en crímenes de lesa humanidad, categoría jurídica que se somete a los preceptos del derecho internacional, los que consagran como principio vinculado a la efectividad de la tutela convencional, el de la imprescriptibilidad, concepto que no puede entenderse de modo pleno, si es que no se concluye que su alcance no se agota en el ámbito penal, sino que se extiende al civil. Por lo demás, la fuente de la obligación de reparación que le corresponde al Estado no se afina exclusivamente en las normas constitucionales, sino que de modo preferente, en los principios generales del derecho humanitario y en los tratados internacionales, los que deben primar por sobre las codificaciones civilistas. Así también fluye de la normativa contenida en los artículos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, por la cual se establece que la responsabilidad del Estado en este contexto, al sujetarse a las reglas del Derecho Internacional, no pueden ser eludidas por la aplicación preferente de otros preceptos de derecho interno, cuestión que se encuentra refrendada por el artículo 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados.

De esta manera, aplicar las reglas de la prescripción del derecho privado en casos como el de la especie, generaría un contrasentido normativo de naturaleza fundamental, pues se estaría cautelando al ente estatal por sobre el interés particular. Así las cosas, las normas de derecho interno previstas en el Código Civil sobre prescripción, no tienen cabida en la especie, al oponerse a las normas de derecho internacional de los derechos humanos que protegen el derecho de la víctima de recibir la reparación correspondiente en forma íntegra que, por ende, no prescribe.

Por lo razonado, la excepción de prescripción, será desestimada.

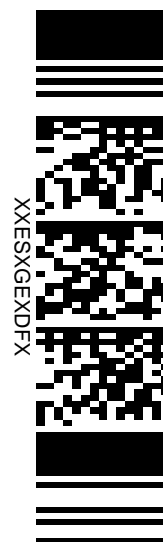
**5°** Que en lo relativo a la excepción de pago o de reparación, cabe señalar, en la misma línea argumentativa anterior, que conforme lo sostiene la jurisprudencia vigente de la Corte Suprema, la obligación de reparación íntegra en



este tipo de casos, corresponde a un concepto y noción que emana de la aplicación preferente, en el ámbito interno, del derecho internacional de los derechos humanos para cumplir los compromisos que el Estado chileno ha contraído al suscribir una serie de tratados internacionales sobre tales prerrogativas, que conforme se dispone en el artículo 5° de la Constitución Política de la República, se incorporan al derecho nacional con un rango normativo que colocan al Estado chileno en la obligación de asumir la responsabilidad reclamada.

En tales condiciones, las acciones estatales concretadas en la dictación de cuerpos normativos, como lo son las Leyes N° 19.123 y 19.980 y otras iniciativas cuyo objeto es la búsqueda de reparación satisfactoria, conforme los lineamientos de los organismos internacionales pertinentes, corresponden a estándares mínimos en tal fin, que en caso alguno agotan el derecho de las víctimas del accionar indebido del Estado, a procurar una compensación integral, por lo que tales medidas no son incompatibles con el ejercicio de una acción como la de autos, sin perjuicio de ser considerados tales esfuerzos fiscales, en la determinación de eventuales montos indemnizatorios, por lo que la excepción en comento, también deberá ser desestimada.

6° Que en tal entendido, y encontrándose acreditado que los demandantes fueron víctimas de acciones ilícitas cometidas por agentes del Estado, fluye que dicho actuar es una contravención directa a las normas del derecho internacional y de la propia Constitución Política de la República, conforme se consagra en sus artículos 6° y 7°. Por otro lado, se debe tener presente, que el artículo 38 de nuestra Ley Fundamental, expresa en su inciso segundo que *“Cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la Administración del Estado, de sus organismos o de las municipalidades, podrá reclamar ante los tribunales que determine la ley, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiere afectar al funcionario que hubiere causado el daño”*, de modo que, establecidos los hechos delictivos, se debe concluir la responsabilidad del Estado de Chile en los sucesos relatados por los demandantes de autos, haciéndose procedente la indemnización de los perjuicios causados relativos al daño moral sufrido por ellos.



7° Que para acreditar el daño moral sufrido se tendrá en cuenta la prueba de la parte demandante, relacionada en la sentencia en estudio, tanto aquella que da cuenta de un modo genérico de las consecuencias psicológicas, físicas, sociales y emocionales que han evidenciado las víctimas de tortura y represión política en el régimen militar chileno, como la testimonial en la que fue descrita de modo más concreto, refiriendo la angustia y los efectos dañinos que subsisten hasta el presente que estimaron además, difícil de cuantificar, pero considerándolo irreparable. Dichos elementos permiten tener por demostrado el daño psicológico y emocional sufrido por los demandantes.

8° Que en lo que cabe a la cuantía del daño demandado, se tiene presente lo ya manifestado a propósito de la excepción de pago alegada por el Estado, en el sentido que las víctimas han percibido diversos montos dinerarios y otros beneficios, además de reparaciones simbólicas, precisamente a consecuencia de su calidad de víctimas de violaciones de derechos humanos.

Es así como en la sentencia que se revisa, se dejó constancia en el motivo quinto de todos los valores percibidos por los actores, consistentes en la denominada pensión de exonerado, pensión Valech, el aporte único de la Ley 20.874, bonos Ley 19.992 y aguinaldos, lo que ha significado desembolsos del Estado hacia los demandantes por sumas que fluctúan entre diecisiete y treinta y siete millones de pesos, a la fecha del informe, además de las pensiones que perciben en la actualidad.

Luego, si bien ya se expresó que el otorgamiento de tales beneficios e indemnizaciones o pensiones, no excluye la indemnización que ahora se pide, por no ser incompatibles, sucede que igualmente tales desembolsos fiscales deben ser tenidos en consideración al momento de regular el *quantum* a ordenar, puesto que todos esos pagos tienen su origen en los mismos hechos que sirven de fundamento a esta acción.

En tales condiciones, se regula la indemnización por el daño moral sufrido a propósito de los hechos investigados en este proceso y que deberá pagar el Fisco de Chile, en \$20.000.000 (veinte millones de pesos), para cada uno de los demandantes, cantidad que deberá ser pagada con el reajuste del Índice de



Precios al Consumidor desde que la sentencia quede ejecutoriada hasta su pago efectivo, más intereses corrientes para operaciones reajustables desde que la demandada sea requerida de pago en el cumplimiento.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, a lo dispuesto en los artículos 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, **se revoca** la sentencia apelada de diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, dictada por el 8° Juzgado Civil de Santiago, en cuanto acogió las excepciones de prescripción y de reparación integral o pago, planteadas por la demandada, y en su lugar **se declara** que se rechazan dichas defensas y, por tanto, **se acoge** la demanda pero sólo en cuanto se condena al Fisco de Chile, a pagar una indemnización por el daño sufrido por los actores, ascendente a la suma de \$20.000.000 (veinte millones de pesos) para cada uno de ellos.

**Se previene que la ministra Claudia Lazen Manzur** concurre a la confirmatoria, pero sin compartir el fundamento octavo de este fallo, estimando que la indemnización a pagar debía fijarse en \$40.000.000, suma que considera satisface la prudencia exigida en su cálculo, conforme el mérito del proceso.

Regístrese y devuélvase.

**N° 4649-2020 Civil**

Pronunciada por la Décima Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada con los ministros Carolina Vásquez Acevedo, Patricio Martínez Benavides y Claudia Lazen Manzur.

No firma el ministro Patricio Martínez Benavides por encontrarse ausente.



Pronunciado por la Decimotercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por los Ministros (as) Carolina Soledad Vasquez A., Claudia Lazen M. Santiago, veintidós de junio de dos mil veintitrés.

En Santiago, a veintidós de junio de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.  
A contar del 02 de abril de 2023, la hora visualizada corresponde al horario de invierno establecido en Chile Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>